



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintitrés de septiembre de dos mil veinte

18-152

Proceso: **APELA SENTENCIA**
Demandante: **ELKÍN LÓPEZ SÁNCHEZ**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-013-2017-00570-01**
Decisión: **MODIFICA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de la referencia.

Se reconoce personería a la doctora MANUELA ANDREA LOPEZ HENAO, quien es mayor de edad, e identificado con cedula de ciudadanía 1.128.441.076 y portadora de la tarjeta profesional 253.225 del C.S. de la J, para que represente los intereses de COLPENSIONES, conforme sustitución de poder que le hiciera el apoderado ANDRES EDUARDO SALCEDO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.444.287 y con tarjeta profesional 262.589 del C.S. de la J., en calidad de representante legal de la firma ABACO Abogados y Consultores.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en sala virtual en el **ACTA 27** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende la parte actora que se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la reliquidación de la pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 90% del IBL, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta el Ingreso Base de Liquidación reconocido en la Resolución GNR 230246 de 2013, a partir del 22 de octubre de 2011, la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO, EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que se afilió al ISS el 23 de febrero de 1977 y posteriormente se vinculó a TELECOM, que asumió la responsabilidad en cuanto a la carga pensional y en 1994 dicho empleador lo afilió a CAPRECOM. Que entre el año 2000 y el 2004 se afilió a PROTECCIÓN y finalmente regresó al ISS donde cotizó hasta el 21 de octubre de 2011.
- Que COLPENSIONES le reconoció pensión de vejez a través de la Resolución GNR 230246 de 2013, en aplicación de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, con base en 1.541 semanas cotizadas, teniendo en cuenta un IBL de \$946.430, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 73.62%, para una mesada de \$696.762 a partir del 2011
- Que ante la solicitud de reliquidación de la pensión, a través de la Resolución GNR 352992 de 2015, COLPENSIONES reconoce que es beneficiario del régimen de transición aplicándole la Ley 71 de 1988, en lugar de aplicarle el Decreto 758 de 1990, que le era más favorable.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Respecto a los hechos señaló que acepta como cierta la fecha de nacimiento del actor y el contenido de las resoluciones expedidas por la entidad, aclarando que cuando se recibe la solicitud pensional se estudian todas y cada una de las normas del régimen de transición y se le aplica la más favorable. Respecto a las demás afirmaciones señaló que se trata de apreciaciones de la parte actora que serán objeto de debate probatorio.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida el 6 de julio de 2018, **CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor **ELKÍN LÓPEZ SÁNCHEZ**:

- La suma de **\$1.340.851** por reajuste pensional causado entre el 22 de octubre de 2011 y el 30 de junio de 2018, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago y de la cual autorizó realizar el descuento del aporte en salud. Y a partir del 1º de julio de 2018 a continuar reconociéndole la suma de **\$17.826** como reajuste mensual sobre el valor de la mesada que actualmente recibe, sin perjuicio de los incrementos para los años subsiguientes.
- Las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DE LA JUEZ

Si bien el demandante es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que a la entrada en vigencia del régimen de pensiones tenía más de 15 años de servicio, tal como lo aceptó COLPENSIONES en la resolución GNR 352992 de 2015, lo que le da derecho a que su pensión sea reconocida conforme al régimen anterior, no es posible reliquidar su pensión con el monto del 90% aplicando el Decreto 758 de 1990, sumando a las semanas cotizadas al ISS con las laboradas en el sector público sin cotización, pues esta norma no permite tal sumatoria, la cual solo es posible a la luz de la sentencia SU-769 de 2014, cuando se trata del reconocimiento de la pensión y no es aplicable para casos en que ya la pensión está reconocida conforme a otra norma, pues el derecho a la pensión ya se encuentra garantizado, por lo que estimó que no era posible reliquidar la pensión del actor conforme al Decreto 758 de 1990, por lo que absolvió a la entidad demandada de la reliquidación deprecada.

Sin embargo, estimó la a quo, que el demandante por ser beneficiario de transición también tiene derecho a la aplicación de la Ley 71 de 1988, norma que si permite la sumatoria de tiempos públicos y privados y que establece una tasa de reemplazo del 75%, superior a la que le fue reconocida al actor, por lo que es claro que dicha norma le es más favorable, por consiguiente estimó que era procedente reajustar la pensión del demandante con un monto del 75% sobre el IBL liquidado por la entidad, obteniendo una mesada inicial de \$710.270 para el 2011, valor superior al reconocido por la entidad de \$696.762, por lo que condenó a COLPENSIONES a reliquidar la pensión del demandante a partir del 22 de octubre de 2011, dado que ningún reajuste se vio afectado de prescripción, suma que deberá ser indexada a la fecha del pago para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y de la cual autorizó realizar el descuento del aporte en salud.

2.2. APELACIÓN DEL DEMANDANTE

La apoderada del demandante señaló que la interpretación que realiza la juez frente a la sentencia SU-769 de 2014 es una interpretación restrictiva, teniendo en cuenta que esta no distingue en que el tiempo público y privado sea tenido en cuenta para la reliquidación o para el reconocimiento de la pensión de vejez. Agrega que conforme al principio de favorabilidad al actor se le debe aplicar el Decreto 758 de 1990, toda vez que es una norma que le es más favorable, y teniendo en cuenta que conforme la sentencia de la Corte se debe sumar el tiempo cotizado con el sector privado y el tiempo público, que está respaldado a través del bono pensional que ya fue pagado a COLPENSIONES, por lo que la pensión del demandante se debe reliquidar aplicando un monto del 90% por tener más de 1250 semanas con el IBL reconocido por la entidad y en ese sentido se debe modificar la sentencia de primera instancia.

2.3. ALEGATOS DE COLPENSIONES

La apoderada de la entidad demandada señaló que se debe confirmar la decisión de primera instancia, toda vez que el legislador en materia de seguridad social fue claro en indicar que para el reconocimiento de las prestaciones económicas a cargo de los fondos de pensiones en donde existiera cotizaciones realizadas al sistema y cotizaciones laborados en el sector público, pero no cotizadas al régimen, deberían ser acogidas bajo los principios de la Ley 71 de 1988. En ese sentido, se aclara que, por regla general, según la decantada Jurisprudencia Laboral, el Decreto 758 de 1990 al ser la normativa propia del Seguro Social, sólo permite la acumulación de tiempos cotizados allí, siendo la excepción la aplicación de la Sentencia 769 de 2014, respecto las personas que no tienen derecho al reconocimiento pensional sin embargo, como quiera que en el caso particular el accionante se encuentra percibiendo una pensión de vejez, es decir, no se encuentra afectado el goce efectivo del derecho a la Seguridad Social, se concluye que no le son aplicables los presupuestos señalados en la Sentencia 769 de 2014 y consecuentemente no era dable acceder a la pretensión de reliquidación conforme al Decreto 758 de 1990.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si es procedente la reliquidación de la pensión del demandante aplicando un monto del 90%, conforme al Decreto 758 de 1990, sumando las semanas cotizadas al ISS con las laboradas en el sector público.

Así mismo se revisarán en CONSULTA los temas que no fueron apelados y que le fueron adversos a COLPENSIONES, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, conforme a la Resolución GNR 230246 de 2013, que reposa a folio 30/32 del expediente, se encuentra probado que al señor ELKÍN LÓPEZ SÁNCHEZ le fue reconocida la pensión de vejez a partir del 22 de octubre de 2011, en aplicación de la Ley 100 de 1993 con la modificación de la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta un IBL de \$946.430 al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 73.62%, para una mesada pensional del \$696.762, con base en 1.541 semanas cotizadas.

Posteriormente la entidad demandada, a través de la Resolución GNR 352992 de 2015, visible a folios 37/39, reconoce que el señor LÓPEZ SÁNCHEZ es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a pesar de haberse trasladado al RAIS, ya que a la entrada en

vigencia del Sistema General de Pensiones contaba con más de 15 años de servicios y por tanto tiene derecho a que su pensión se liquide conforme a la Ley 71 de 1988, aplicando un monto del 75% con un IBL por valor de \$947.026; sin embargo, la entidad estimó que la mesada que correspondería para el 2012 sería de \$710.270, inferior a la que venía devengando el actor, por lo que no se accedió a reajuste pensional alguno.

Por su parte, la juez de primera instancia estimó que no era procedente reliquidar la pensión del actor en aplicación del Decreto 758 de 1990 como se pretende en la demanda, dado que dicha norma no permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por lo que condenó a la reliquidación de su mesada pensional en aplicación de la Ley 71 de 1988 aplicando un monto del 75% por ser superior al inicialmente reconocido.

Ahora, tal y como lo reconoce la entidad en la Resolución GNR 352992 de 2015, como el actor es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cual le permite que para el reconocimiento de vejez se tengan en cuenta las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen anterior al cual venía afiliada, sin que fuera necesario estar cotizando o estar adscritos a un determinado régimen a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, sino que lo importante era haber pertenecido a cualquiera de los regímenes existentes de los cuales se les conservarían las condiciones de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto tal y como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en múltiples pronunciamientos como en sentencia 43181 de 14 de junio de 2011, 48031 y 42.301 de 2012 entre otras.

En el caso particular del señor ELKÍN LÓPEZ SÁNCHEZ, según consta en las pruebas obrantes en el proceso, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 había laborado al servicio de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM, entre el 17 de marzo de 1977 y el 20 de febrero de 1995, entidad pública sin cotización al ISS, y según su historia laboral obrante a folios 14/19 había cotizado al ISS con empleadores del sector privado entre el 23 de febrero de 1977 y el 15 de marzo de 1977, por lo que en virtud de la transición le eran aplicables las disposiciones tanto de la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988 como del Decreto 758 de 1990.

Debe observarse como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia Radicado 33140 del 27 de mayo de 2009, consideró que el régimen de transición aplicable es aquel que le resulte más favorable al afiliado y no necesariamente el anterior de una manera inmediata a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. Por consiguiente, es claro que al actor le era viable la aplicación del Decreto 758 de 1990, normatividad que exigía para acceder a la pensión de vejez acreditar 60 años de edad, en el caso de los hombres y 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, y permite aplicar un monto hasta del 90%, siempre y cuando se cuente con más de 1250 semanas cotizadas.

Ahora bien, tal y como lo indicó la juez de primera instancia, en lo que respecta a la procedencia de computar o sumar semanas del sector público con cotizaciones del privado, en aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 36 Ley 100, concordado con el Decreto 758 de 1990, existían varias posiciones.

Por un lado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sostenía que no procedía tal sumatoria para efectos de la aplicación de la transición, al no ser posible escindir las normas, tomando lo más favorable de ellas; indicando que se debían aplicar, en su integridad y estimando que dicha acumulación –de semanas- se permitía solo en aplicación de la Ley 100 de 1993 –y sus posteriores modificaciones- ó para efectos de aplicación de la pensión por aportes, consagrada en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988.

De otro lado, la Corte Constitucional a través de sentencia SU-769 de 2014, concluyó que era posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, toda vez que del tenor literal del Decreto 758 de 1990 no se desprende que el número de semanas de cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS, por lo que conforme a la Constitución y los principios de favorabilidad y pro homine, ante la duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, el operador jurídico, judicial debe optar por la situación que resulte más favorable al trabajador, por lo que para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social se debe permitir tal sumatoria con el fin de no hacer nugatorio el derecho a la pensión.

Sin embargo, a través de la sentencia T-508 de 2017 la Corte limitó la aplicación de la sumatoria de tiempos públicos y privados, determinando unas sub-reglas aplicables en los casos en que se pretendía la aplicación del Decreto 758 de 1990 conforme a la regla jurisprudencial abstracta de la sentencia SU-769 de 2014, estimando que la aplicación de la regla jurisprudencial de la acumulación de tiempos, solo es procedente de forma excepcional cuando se trate de proteger el derecho a la pensión cuando la persona no acredite los requisitos para acceder a la pensión conforme a otra normatividad y por tanto no sería aplicable cuando se pretenda la reliquidación de la prestación ya reconocida, posición acogida por el suscrito cuando hacia parte de otra sala de decisión.

Empero, en una nueva mirada del tema, la Corte Suprema de Justicia, recientemente, en la sentencia con radicado 84243 (SL 1981) del 1° de julio de 2020, varió su posición y admitió que es posible sumar las semanas cotizados al ISS con las del sector público; dicha sentencia se fundamentó, entre otros aspectos, en que después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se quiso unificar la cantidad de regímenes existencias y procurar un sistema universal, por lo que le concedió validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador, lo cual se hace extensivo a los beneficiarios del régimen de transición, señalando en el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que para el

reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. En esta oportunidad señaló la Corte:

“No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

Para modificar tal criterio jurisprudencial, debe destacarse que tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador.

Este tipo de regímenes se prevé en los sistemas de seguridad social a fin de que los cambios legislativos en materia pensional no sean abruptos para los ciudadanos, sino que su aplicación sea progresiva y gradual y no se afecten las expectativas legítimas de quienes se encontraban cerca de consolidar los derechos prestacionales. Es el establecimiento de condiciones de transición lo que garantiza la aplicación ultraactiva de la disposición anterior, se reitera, en algunos aspectos definidos por el propio legislador.

Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.

Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado.

Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que debe contar es el trabajo humano.

La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de

seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.

Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens (...).

Así mismo a través de sentencia con radicado 72425 (SL2557-2020) del 8 de julio de 2020, en un caso similar al de autos, donde la persona se había pensionado con Ley 71 de 1988 y pretendía la aplicación del Decreto 758 de 1990 para incrementar su monto al 90%, la Corte estimó que la sumatoria de tiempos públicos y privados con el Decreto 758 de 1990 era viable también para reliquidación, indicando que:

“Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.

De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante.

Así las cosas, la recurrente tiene la razón en cuanto afirma que tiene derecho a la reliquidación reclamada porque el régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990 es más favorable que aquel con el que la entidad de seguridad social accionada reconoció la pensión.”

Así las cosas, en un nuevo estudio del tema y acogiendo los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que están en armonía con lo planteado en la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-769 de 2014, se recoge la posición anterior y se estima que es procedente la sumatoria de semanas de cotización con tiempos públicos para reliquidar la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición en aplicación del Decreto 758 de 1990.

Por consiguiente, descendiendo al caso de autos, se considera que aunque al señor ELKÍN LÓPEZ SÁNCHEZ le fue reconocida la prestación en aplicación de la Ley 100 de 1993 y posteriormente reliquidada con la Ley 71 de 1988, este cumple con los requisitos para que su pensión se liquide conforme a los postulados del Decreto 758 de 1990, toda vez que cumplió 60 años de edad el 22 de octubre de 2011 y tiene 674.29 semanas cotizadas al ISS y 875 semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS, tal y como lo reconoce la entidad en la Resolución que le reconoció la pensión de vejez obrante a folio 37, acumulando un total de 1.549 semanas, y por tanto de conformidad con el artículo 20 del citado Decreto 758 tiene derecho a que se le aplique un monto del 90%, por serle más favorable, como se solicitó en la demanda.

Ahora, en cuanto al IBL se tiene que en la citada Resolución la entidad tuvo en cuenta para su liquidación tanto las semanas cotizadas en el sector privado como en el sector público, al haberle reconocido la prestación conforme a la Ley 100 de 1993, por tanto, como la parte actora no presentó reparo frente al mismo se habrá de mantener, el cual asciende a la suma de **\$946.430** que al aplicarle un monto del **90%** arroja una mesada inicial de **\$851.787**, la cual resulta superior a la de \$696.762, reconocida por la entidad y superior a la de **\$710.270** determinada por la a quo, por lo que se concluye que le asiste razón a la parte actora en su recurso.

Por consiguiente se **MODIFICARÁ** la decisión de primera instancia en este punto, ordenando la reliquidación de la pensión de vejez del actor, pero en aplicación del Decreto 758 de 1990 con un monto del 90% a partir del 22 de octubre de 2011, dado que ninguna mesada se vio afectada de prescripción, toda vez que la Resolución GNR 230246 de 2013 a través de la cual se reconoció la prestación a la actora se notificó el 23 de septiembre de 2013 (fl 29) y a partir de allí comenzaba a correr el termino trienal, el cual fue interrumpido con la solicitud de reliquidación presentada por el actor el 28 de agosto de 2015 (fl 33), la cual fue resuelta a través de la Resolución GNR 352992 notificada el 27 de noviembre de 2015 (fl 36) y la demanda se radicó el 22 de febrero de 2017 antes de que transcurriera los 3 años de que trata el artículo 151 del CPT y la SS., actualizando el valor de la condena hasta la sentencia de segunda instancia, conforme lo estipula el artículo 283 del Código General del Proceso, así:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2011	3,73%	\$ 696.762	\$ 851.787	\$ 155.025	3 y 9 días	\$ 511.583
2012	2,44%	\$ 722.751	\$ 883.559	\$ 160.807	13	\$ 2.090.497
2013	1,94%	\$ 740.386	\$ 905.117	\$ 164.731	13	\$ 2.141.505
2014	3,66%	\$ 754.750	\$ 922.677	\$ 167.927	13	\$ 2.183.050
2015	6,77%	\$ 782.374	\$ 956.447	\$ 174.073	13	\$ 2.262.950
2016	5,75%	\$ 835.340	\$ 1.021.198	\$ 185.858	13	\$ 2.416.151
2017	4,09%	\$ 883.372	\$ 1.079.917	\$ 196.545	13	\$ 2.555.080
2018	3,18%	\$ 919.502	\$ 1.124.086	\$ 204.583	13	\$ 2.659.583
2019	3,80%	\$ 948.743	\$ 1.159.832	\$ 211.089	13	\$ 2.744.157
2020		\$ 984.795	\$ 1.203.905	\$ 219.110	9	\$ 1.971.994
TOTAL						\$ 21.536.548

Por consiguiente, se **MODIFICARÁ** la decisión de primera instancia en cuanto al valor adeudado por retroactivo de la reliquidación pensional, el cual asciende a **\$21.536.5488**, liquidado entre el 22 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2020, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago y de la cual se deben hacer los descuentos del aporte en salud, tal y como de forma acertada lo indicó la a quo. Y a partir del 1º de octubre de 2020 la entidad demandada deberá continuarle reconociendo una mesada equivalente a \$1.203.905, sin perjuicio de los incrementos para los años subsiguientes.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada parcialmente con las modificaciones a que se hizo alusión. Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: MODIFICA la sentencia proferida el 6 de julio de 2018 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor **ELKÍN LÓPEZ SÁNCHEZ**, identificado con c.c. 70.053.110 contra **COLPENSIONES**, **debiéndose reliquidar su** pensión de vejez en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990 en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 aplicando un monto del 90%, adeudándole por concepto de retroactivo del reajuste pensional la suma de **\$21.536.5488**, liquidado entre el 22 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2020, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago y de la cual se deben hacer los descuentos del aporte en salud. Y a partir del 1º de octubre de 2020 la entidad demandada deberá continuarle reconociendo una mesada equivalente a **\$1.203.905**, sin perjuicio de los incrementos para los años subsiguientes.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

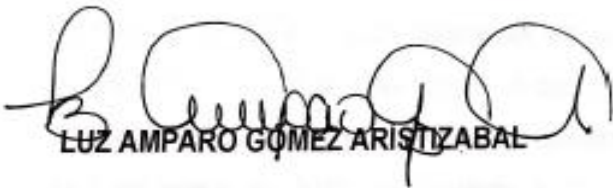
Lo anterior se notificará en ESTADOS, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados

(firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS No. 139 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.
Medellín 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Secretario